

EDITORIAL

Robo de cables

La implementación de políticas más estrictas y el fomento de la denuncia son esenciales para erradicar esta práctica delictiva.

El robo de cables de cobre se ha convertido en un flagelo que afecta gravemente a nuestra región, incluyendo a La Serena y Coquimbo. Este delito, motivado por el alto valor del metal en el mercado negro, no solo representa una pérdida económica significativa para las empresas de servicios públicos, sino que también pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Cada vez que se sustraen cables de cobre, las consecuencias son inmediatas. La interrupción del suministro eléctrico y de telecomunicaciones afecta a miles de hogares y negocios, generando un caos que se traduce en pérdidas económicas. De paso, la falta de luz en calles y espacios públicos no solo propicia un ambiente propicio para otros delitos, sino que también aumenta el riesgo de accidentes y pone en peligro la integridad de quienes transitan en esas áreas.

Además, el costo de la reposición de estos materiales recae, en última instancia, sobre los ciudadanos. Asimismo, las empresas, en un intento por proteger su infraestructura, deben invertir en medidas de seguridad adicionales, lo que a su vez limita su capacidad de inversión en proyectos de desarrollo local. Asimismo, quienes suelen sufrir graves consecuencias por estos cortes de energía también, son aquellas personas electrodependientes, para quienes el suministro de energía es sencillamente vital. Por eso, es imperativo que tanto las autoridades como la comunidad se unan en la lucha contra este problema, y para ello, la implementación de políticas más estrictas y el fomento de la denuncia son esenciales para erradicar esta práctica delictiva a la que, hasta ahora, no se le ve próxima solución.